

La Unidad Popular y El Surgimiento del Frente Democrático Revolucionario

Italo López Vallecillos
y Víctor Antonio Orellana

RESUMEN

El trabajo describe y examina, desde el ángulo histórico-político, los diferentes tipos de unidad popular surgidos en la sociedad salvadoreña de 1970 al primer trimestre de 1980. Las experiencias electorales de la UNO en sus dos grandes momentos, 1972 y 1977, y la respuesta del sistema oligárquico de negación de los derechos políticos sirven de referencia clave para explicar los sucesos de 1978 y 1979. La constitución del Foro Popular como otra modalidad integradora de fuerzas populares, las motivaciones del golpe militar del 15 de octubre de 1979 y el desarrollo que éste ha tenido en sus distintas recomposiciones en la cúpula del poder del aparato del Estado, son estudiadas en el contexto de una sociedad que ha agotado su modelo económico y su proyecto político. El ensayo se adentra en la respuesta popular frente a la dominación económica, política y militar, señalando el nacimiento y movilización de diversas organizaciones de masas, gremiales, sindicales y de resistencia armada contra la dictadura. El surgimiento de la Coordinadora Revolucionaria de Masas, aglutinando al BPR, FAPU, UDN y LP-28, en una apertura que se condensa en el Frente Democrático Revolucionario, da pie para que los autores analicen la nueva alternativa popular en el seno de una sociedad largamente militarizada y en una situación de crisis y singulares condiciones de lucha.

Introducción

El 11 de enero de 1980, en el auditorio de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, miembros de la alta dirigencia de las organizaciones político-populares: Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28), Partido Unión Democrática Nacionalista (UDN) y Bloque Popular Revolucionario (BPR), convo-

caron a periodistas nacionales y extranjeros y a numerosos simpatizantes, a una conferencia de prensa en la cual anunciaron los planteamientos y conceptos fundamentales de un amplio acuerdo de unidad que se sustentaría en la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM).

Con este acto las fuerzas populares abandonaban sus diferencias y resistencias, y mostraban al pueblo salvadoreño y al mundo su elección consciente y madura en favor de la unidad. Se

dejaba atrás una larga y ancha gama de mutuas acusaciones, argumentos, lemas absolutizantes y conductas sectarias.

En El Salvador una expresión unitaria de tal naturaleza es, sin duda alguna, un hecho singular. La izquierda se ha caracterizado por la atomización en sus diversos matices y formas. Algunos indicios avizoraban la posibilidad, aunque a más largo plazo, dado lo enconado de la lucha ideológica entre las organizaciones populares, frentes políticos, asociaciones gremiales y sindicales que conforman actualmente la nueva entidad. La resonancia internacional del acontecimiento ha sido importante. Los periódicos del extranjero dedicaron buen columnaje a la integración y coordinación de los movimientos revolucionarios del país. Organizaciones políticas centroamericanas y latinoamericanas saludaron y se solidarizaron con la actitud asumida por los principales grupos de masas de El Salvador.

En realidad, todo el mundo se aprestó a encarar y analizar de una manera diferente la situación nacional.

En este mismo momento, tanto a nivel nacional como internacional, numerosos y diversos focos de atención intentan ver del modo más claro posible, la profunda significación que tiene la experiencia de la unidad orgánica de las fuerzas populares en El Salvador, en circunstancias que ya comienzan a producir reacciones respecto a la Plataforma Programática de la Coordinadora de Masas, dada a conocer el 28 de febrero de 1980.

Los preparativos de la unidad popular, cubren prácticamente, un largo lapso de la historia del país. La unidad amplia del pueblo salvadoreño ha sido un sueño permanente de demócratas y revolucionarios de todos los tiempos y de todas las tendencias. Para cada una de las organizaciones que integran la unidad alcanzada, hay un trasfondo de luchas, de victorias y derrotas. Los esfuerzos por lograr aglutinar el más nutrido grupo de fuerzas democráticas y antifascistas del país, se han visto frustrados en los últimos años por varios hechos, entre los cuales se podrían enumerar: diferencias en cuanto a los objetivos, métodos de lucha y acción planteados para la unidad; perspectivas distintas en cuanto a la estrechez o amplitud de las alianzas; ángulos específicos en cuanto a identificar el proceso o procesos de la realidad nacional. Habría que mencionar también, las difíciles condiciones impuestas por la represión, así como las expectativas generadas por los programas reformistas en-

sayados en distintos períodos.

En los últimos tres lustros, los diferentes gobiernos de conducción militar, con sus peculiaridades concretas, han impuesto graves sufrimientos al pueblo salvadoreño. El asesinato de cientos de personas, la tragedia de los desaparecidos, las batidas, las capturas, las "peinas" en cantones y caseríos, la eliminación sistemática y selectiva de dirigentes obreros, campesinos, estudiantes y profesionales, la persecución de la Iglesia, la eliminación de dirigentes religiosos, el exilio, la vigilancia vecinal, el terror como sistema, las formas espúreas de toma del poder, el desempleo, los bajos salarios, la exclusión y control de la oposición legal, las presiones y destrucción de los medios de comunicación independientes, la vigilancia de elementos democráticos, han golpeado de modo directo o indirecto a miles de salvadoreños. No están exentos de responsabilidad los civiles que, desde los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial han contribuido a viabilizar la dominación y a desnaturalizar la democracia liberal.

En condiciones de arbitrariedad, de abuso y crimen, el pueblo salvadoreño ha vivido un largo período carente de unidad política y práctica de sus organizaciones más representativa.

La presencia de organizaciones populares y de otros sectores democráticos ha sido constante. Hay una larga sucesión de luchas en el pasado inmediato, aunque no siempre hubo coincidencia entre ellas. Las tendencias e ideologías, en virtud de particular percepción de las realidades específicas de orden nacional, han optado por métodos de acción diferentes, sin perder de vista la necesidad de la unidad.



Algunas de estas alternativas no fueron equivocadas en sí mismas; fue la reacción oligárquica y autoritaria la que se encargó de hacerlas no viables. La valoración más general no puede ignorar, por ejemplo, que la unidad del pueblo en el bloque electoral de 1972, alcanzó el triunfo en las urnas. El ascenso a la Presidencia de la República del Coronel Arturo Armando Molina en situación de total ilegitimidad, generó al interior de la sociedad salvadoreña las condiciones objetivas de un total descrédito de la democracia liberal burguesa y un desaliento generalizado en las capas medias por el sistema electoral.

El régimen de Molina sirve en la historia más reciente, para describir la línea represiva y autoritaria que caracteriza al modelo político salvadoreño, de manera tal que la exclusión de los sectores democráticos de la conducción del aparato burocrático del Estado, impidió en su gestión la puesta en práctica de medidas económicas y sociales de beneficio colectivo.

La clase dominante, dueña de los medios de producción y beneficiaria del sistema, ha sufrido así a lo largo de los años una atrofia de conciencia de su papel rector del proceso, ignorando las necesidades básicas, en el orden económico y social de la mayoría de salvadoreños y burlando por todos los medios a su alcance los principios e ideales del pacto social asentado en las diferentes Constituciones de la República.

La brecha entre la clase dominante y la dominada en El Salvador adquiere proporciones insalvables, a pesar de los esfuerzos de estratos subordinados por implantar cambios y reformas modernizantes.

Todos los intentos de democratización han sido frenados, prostituidos, neutralizados por el gran capital salvadoreño. La visión de la clase privilegiada ha sido, en este aspecto, de una miopía increíble. En lugar de liquidar todas las formas de explotación servil e imponer un modelo de desarrollo capitalista autónomo, las acciones han sido para mantener un statu quo de injusticia, marginalidad y sobre-explotación.

De 1972 a 1977 —tiempo durante el cual gobernó Molina, y del cual partimos para historizar hechos significativos— el autoritarismo y el desarrollismo capitalista dependiente, mostró su ineficacia y desnudó el verdadero carácter del Estado oligárquico-burgués de El Salvador.

La transformación agraria de 1976, para citar un solo caso, señala cómo un proyecto de redistribución económica, dentro del régimen capitalista, fue boicoteado y derrotado por el sector poderoso del país. El gobernante tuvo que ceder ante la presión de las fuerzas reaccionarias. El reformismo cayó de rodillas ante la oligarquía, pero abrió los ojos del estamento militar y, naturalmente, de todo el pueblo salvadoreño.

En el orden político la alternativa electoral de 1977, en la que se intentó un "reencuentro" con la Fuerza Armada por parte de sectores democráticos integrados en la Unión Nacional Opositora (UNO), fue otro revés para el proceso de democratización del país. El fraude, la coacción, la hegemonía del gran capital en asocio con capas militares corrompidas, negó el triunfo en las urnas al candidato de la UNO, esta vez ampliada con elementos de baja, en retiro o en disponibilidad, de la Fuerza Armada. La imposi-



ción, una vez más, declaró Presidente de la República al General Carlos Humberto Romero (Julio de 1977), frustrando a dirigentes políticos y a amplias masas de votantes.

El pueblo salvadoreño, no obstante el agobio y la coacción, triunfó en 1972 y triunfó nuevamente en 1977. Ganó en conciencia, en organización, en claridad ideológica y, desde luego, en la redefinición total del proceso. Para quienes creían en la lucha pacífica y legal, el camino se había cerrado dos veces. Demasiadas en un país urgido de transformaciones profundas. Las acciones siguientes coincidirían en una cerrada oposición a los gobiernos ilegítimos, impuestos. Así, el pueblo unido derrotó, aunque con direcciones diferentes de masas, la desprestigiada Ley de Defensa y Garantía del Orden Público. La lucha popular cada vez amplia, acabaría por desestabilizar y aislar al gobierno del General Romero, aportando un esfuerzo considerable en su derrocamiento, ocurrido el 15 de octubre de 1979.

Por todo ello puede decirse que la unidad proclamada el 11 de enero, es el resultado de una larga lucha. La unidad representada en la Coordinadora Revolucionaria de Masas, no corresponde a una creación espontánea. Ella se entronca en una sucesión de hechos pasados relevantes, que fueron poniendo las bases para construir una nueva fuerza política, capaz de aglutinar a la totalidad de sectores opuestos al sistema oligárquico y en línea a hegemonizar la acción democrática y revolucionaria.

El objetivo del presente trabajo es pasar revista a aquellos acontecimientos del pasado, que merecen considerarse como antecedentes, dentro de su propia especificidad. Se describen hechos de cohesión de fuerza popular y democrática, a partir de coincidencias de movilización política y operativa, frente a la alternativa dictatorial y el cierre a las vías pacíficas de participación ciudadana.

La revisión de los sucesos cruciales, así como el examen de las condiciones en que surge el acuerdo de unidad revolucionaria plasmado en la CRM y en el Frente Democrático Revolucionario esperamos contribuya a formar conciencia del significado del proceso integrador en curso, evitando el sectarismo, el dogmatismo, el voluntarismo de los líderes y la espontaneidad del movimiento.

1. Antecedentes

1.1. El bloque electoral: la UNO.

Con la Alianza para el Progreso, a partir de 1960, se abre un proceso de apertura democrática que va a permitir uno de los periodos relativamente más largos para la existencia de los partidos políticos. Surgen así algunos partidos doctrinarios e ideológicos, y se comienza a participar en elecciones para diputados y alcaldes, con lo que se verifica el nivel representativo del Gobierno (sistema partidario, Poder Legislativo y gobiernos locales).

A partir de coincidencias respecto a las reformas a introducir a la Ley Electoral en 1970, se comienza a manejar la idea de una posible alianza política entre los partidos Movimiento Nacional Revolucionario, Democracia Cristiana y Unión Democrática Nacionalista.

La dirección de estos partidos logró aislar áreas de convergencia sobre la cual implementaron en 1971 una coalición política en torno a un objetivo estratégico de alcanzar el triunfo electoral y realizar el programa de gobierno independiente, democrático, de cambios y progreso social, de la UNO.

Una elección política expresa diversos factores propios del desarrollo de una sociedad. Sin embargo, en esta parte únicamente nos proponemos realizar una puntualización de aquellos aspectos sobresalientes del proceso político de 1972 y 1977, destacando las consecuencias principales relacionadas directa o indirectamente con la organización popular.

En este sentido comencemos por señalar que la unidad se realiza por un objetivo estratégico electoral. Dicho fin planteaba la necesidad de una movilización suficientemente amplia para lograr la toma del poder dentro del marco institucional. Por lo que respecta a la composición, a nivel de la dirección, se advierte que estaba representada por un partido doctrinario: el PDC; partido que se reclama inspirado en el pensamiento social de la Iglesia y en el pensamiento cristiano. Desde otro punto de vista se trata de un partido que declaraba reconocer el pluriclismo interno; en aquel entonces se mostraba que su ascenso era favorecido por su trabajo electoral en algunas alcaldías, así como por iniciativas sociales de la Iglesia y de entidades de laicos cristianos que desarrollaban un importante trabajo de organización y promoción de cuerpos intermedios que,

aunque coincidían con los principios del partido nunca estuvieron orgánicamente articulados a él.

El UDN, se mostraba como un partido anti oligárquico y anti-imperialista muy bien organizado, con activos cuadros políticos. Tras él se hallaba la dirigencia del Partido Comunista Salvadoreño que, por carecer de legalidad, llenaba la función que teóricamente corresponde cumplir a la pequeña "burguesía nacional". El UDN pretendía representar los intereses de una clase específica dentro de una alianza con otros sectores. En tercer término se tenía al MNR, pequeño partido de tendencia socialista-democrática, con cuadros técnicos y profesionales de prestigio en el marco nacional.

La UNO aparece en 1972 en un momento en que la derecha está dividida (FUDI, PPS), con fuertes divergencias con el partido oficial (PCN) que representa un proyecto de corte reformista y autoritario.

A partir de las elecciones de 1970, el proceso de apertura democrática comienza a dar señales de agotamiento. Es por esta época que surgen movimientos políticos de izquierda que van a encuadrar su propia estrategia fuera del marco institucional. A pesar del surgimiento de la UNO, la izquierda radical optaría por la vía armada como la única opción posible y correcta para tomar el poder. La crítica a los partidos burgueses (MNR, PDC y UDN) tendría, entonces su mayor expresión. No obstante, la unidad electoral opositora al régimen captó más de 400.000 electores, cifra bastante significativa en el panorama político salvadoreño.

La situación nacional en 1972 presentaba el bien conocido cuadro de un sistema social de raíz capitalista, notoriamente injusto, con una oligarquía reacia a los cambios sociales, y en aquel entonces en situación de shock, sin comprender del todo bien que la asunción cada vez más directa de los militares en la vida política, y sus anunciadas "transformaciones" con autoritarismo, en definitiva, perseguían prolongar el estado de cosas, con refinados métodos represivos inspirados en la seguridad nacional que creara e impulsara el Pentágono, después de la revolución cubana.

En la UNO se encarnó la búsqueda popular, diferente a las alternativas de la derecha y de los proyectos de pocas reformas y mucha represión ofrecidas por el partido oficial. En general, tanto en 1972 como en 1977, el Programa de la UNO era más avanzado que el del PCN.¹ El triunfo de

la UNO, en ambas ocasiones, fue la opción del pueblo por los cambios sociales, la democracia y la libertad, sin autoritarismo militar.

Como consecuencias principales de la elección presidencial de 1972, tenemos:

1. La UNO realizó una movilización mayoritaria, configuró una unidad nacional en torno a los cambios y expresó la tendencia a democratizar el carácter del Estado, "formal" y permanentemente restringido al representar los intereses de determinados grupos sociales.

2. La lucha no se dio entre el dilema histórico comunismo o democracia (como pretendió el PCN) sino entre el fortalecimiento democrático y la anti-democracia.

3. La UNO confirmó tener la dirección de la fuerza política electoral más importante del país, mientras que la derecha (PPS-FUDI) perdió todo terreno y el PCN, de centro derecha, se estancó y se movilizó con suma lentitud y pérdida de credibilidad.

4. Ante la amenaza de un triunfo electoral popular que en ningún momento afectaba al sistema social global, el aparato civil y militar (CCE, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, cuerpos de seguridad, etc.) no vaciló en violar el régimen constitucional, optando por su fidelidad a los valores, ideología e intereses de la clase dominante.

5. Antes de las elecciones, las fuerzas de los tres partidos eran relativamente considerables, pero no decisivas (PDC y UDN principalmente): la plataforma electoral opositora impidió la dispersión de miles de salvadoreños, sin partido ni organización, sin que importarán los problemas de identidad político-ideológica partidaria.

6. En la etapa post-electoral y desde el punto de vista del trabajo partidario de fortalecimiento de la movilización alcanzada, a excepción del UDN, no se advirtió suficiente eficacia para canalizar la unidad partido-masas. El PDC y el MNR perdieron identidad, sus partidarios se volvieron simplemente de la UNO.

El régimen de Molina aplicó una política brutalmente contraria a los intereses populares. En todo momento reprimió la participación opositora legal, y golpeó de modo más endurecido otras formas de participación en que se expresa la conciencia política: sindicatos, cooperativas, asociaciones comunales, etc.

Todo ello como parte de una política al servicio del capital financiero nacional y extranjero, realizando grandes ganancias sobre la base de la



explotación y la represión del pueblo.

La tendencia general, del lado popular, fue la de defender las organizaciones; buscar nuevas formas de lucha y acción para resistir la embestida del régimen en el plano político. En este período aparecen los movimientos de masas: FA-PU, en 1974; BPR, en 1975. El movimiento Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28), surgiría, precisamente, al calor de las luchas post-electorales y de resistencia popular de 1978.

Para asegurar la continuación de su predominio, la reacción impuso la candidatura del General Romero, hombre conceptuado como "duro" y considerado por la derecha como el más indicado para conducir un régimen fascista que parara y destruyera el ascenso de la lucha popular.

Es en esta situación que la UNO debe dar su segunda campaña presidencial, tratando de ganar el gobierno para impulsar un programa democrático y popular. La UNO logró la movilización de una fuerte mayoría. Como detalle peculiar, en esta oportunidad, la UNO ofrece una importante participación a un núcleo de militares en retiro, uno de los cuales fue designado candidato a la Presidencia de la República.

El resultado "electoral" de 1977 fue prácticamente un asalto al poder.² En algunos lugares no se realizó ni siquiera votación. Todo se redujo a un descarado "relleno" de urnas, conexo con un operativo de fuerza y arbitrariedad. El desalojo de los militantes de la UNO en la Plaza Libertad, se efectuó con una capacidad de cerco y disparos desproporcionados; los militares en situación de retiro, alineados tras la bandera del bloque opositor, fueron reprimidos, llamándoseles a "disponibilidad", es decir, una situación militar sin destino o cargo, de alta en el Estado Mayor General. Una ideología absurda que divide a los hombres en militares y civiles, castigaba a quienes osaron identificarse con un programa democrático y de cambios. Es interesante observar que el oficial que opta por oponerse al partido de gobierno, generalmente es desacreditado y separado del resto de sus compañeros de armas. Tal pareciera que salirse del esquema político propuesto por los altos mandos del ejército, constituyera una traición. Eso ocurrió en 1977 y eso mismo sucedió en 1944, 1948, 1956, 1960 y 1961.

Al “relleno” de urnas de 1977 —mal llamada elección— siguió un período de Estado de Sitio y represión. Es decir, una ofensiva global destinada a liquidar cualquier forma de organización y protesta social. El Presidente de la República, Comandante General de la FFAA, y jefe supremo del PCN, fue el responsable del fraude y la imposición, juntamente con los dirigentes del Consejo Central de Elecciones.

La recapitulaciones que se pueden hacer de esta descripción son:

1. El programa reformista de la UNO como intento de solución a la grave crisis social salvadoreña, era sin duda, muy limitado. Así y todo, a la luz de la mayoría movilizada, pareció interpretar en ese momento las aspiraciones populares.

2. Mucho más que otros procesos electorales, este fue atacado por los diferentes grupos revolucionarios (FAPU, Bloque y, desde luego por las FPL, ERP y FARN). Las diferentes estrategias fuera del marco institucional, mantienen por ese entonces una combativa presencia y formulan posibilidades de largo desenlace. La represión genera acciones de resistencia y denuncia, que se perciben aisladas y atomizadas, vertebradas a proyectos de largo plazo que, sin duda, mueven a muchos a optar por las “soluciones” más “inmediatas” de la UNO.

3. La experiencia de contradecir nuevamente la voluntad popular tuvo un efecto confirmatorio (“educativo”) en las masas; perdiéndose confianza en las instituciones formal y restringidamente democráticas del país.

1.2. El Foro Popular.

En septiembre de 1979, un conjunto de fuerzas políticas, sindicales y gremiales, identifican una situación de **aguda crisis política** en El Salvador. Dicha crisis estaría expresada en la imposición de un largo proceso anti-democrático y coersitivo, por parte del gobierno, conjuntamente con sectores y clases reaccionarias, en contra de toda forma de protesta social insumida en el movedizo concepto de “subversión”. Por otra parte, el país vive una situación de profundo desmejoramiento de las condiciones de vida de la población. El estado económico general del país, se caracterizaría por ser “más vulnerable a las influencias exteriores, dada su acentuada dependencia en relación a las potencias económicas capitalistas”, condición que se traduce en una mayor profundización de la penetración de las

transnacionales, con su secuela de explotación que impide y dificulta el desarrollo autónomo y equilibrado de la nación.³

Ante tal situación un grupo de organizaciones forma el Foro Popular. En él figuran:

Partido Demócrata Cristiano;
Partido Movimiento Nacional Revolucionario;
Partido Unión Democrática Nacionalista;
Ligas Populares (LP-28);
Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños (CUTS);
Federación Unitaria Sindical Salvadoreña (FUSS);
Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS);
Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria del Alimento, Vestido, Textil, Similares y Conexos de El Salvador (FESTIAVTCES);
Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS);
Federación de Sindicatos de la Industria de la Construcción, el Transporte, Similares y Conexos (FESINCONSTRANS);
Asociación de Trabajadores Agropecuarios y Campesinos de El Salvador (ATACES);
Central Campesina Salvadoreña (CCS);
Sindicato Textil de Industrias Unidas, S.A. (STIUSA);
Partido Unionista Centroamericano (PUCA).

Se trataba, pues, de un conjunto de fuerzas de diversa procedencia social y de ideologías distintas. Diferencias políticas que el Foro reconoce como reales, pero que son mediadas en torno a necesidades objetivas de realizar la unidad; de construir un bloque de fuerzas representativas de la clase obrera, de los campesinos, de los gremios, de los partidos políticos y de sectores de la clase media.

Al reconocer la existencia de una **aguda crisis política** en el país, el **Foro Popular** llamaba la atención sobre la urgencia de formular un programa amplio de todos los sectores del pueblo para poder afrontar los problemas en forma global. Implícitamente reconocía que ninguna organización por sí misma tenía la solución de los problemas del país. Cualquier pretensión de exclusión, no significaba otra cosa que el fracaso del proyecto y la profundización de la crisis.

El Foro Popular plantea el objetivo de la unidad en torno a la lucha por conquistar “la democracia y la libertad” para el pueblo salvadoreño. Crea una zona de coincidencias básicas, que a título de reivindicaciones mínimas de naturaleza política y económica, se reúnen en una pro-

puesta que se denomina: Plataforma Común. Tales organizaciones dejan abierto el camino a otras entidades populares susceptibles de incorporarse al proyecto. En su forma mínima, dicha Plataforma pedía el cese de la coacción política, la disolución de los instrumentos de terror del régimen (ORDEN, MANO BLANCA, FALANGE, y U.G.B.). La conveniencia de que los cuerpos de seguridad "respetaran la legalidad y el cumplimiento de sus verdaderas funciones"... "garantizando los Derechos Humanos y los preceptos constitucionales". En la Plataforma Común, se señala la necesidad de que se respete la participación de todos los sectores en la vida democrática del país; la vigencia de la libertad sindical, gremial y política. En cuanto a las cuestiones de orden económico, hay que señalar las medidas que hagan posible el acceso de los campesinos al uso y propiedad de la tierra, proporcionándoles facilidades para la producción agropecuaria, así como protección en el área de control de precios de los granos básicos, energía y agua. Con toda seguridad, la Plataforma puede considerarse como una contribución importante en la búsqueda de acuerdos, expresando el sentir de la mayoría del pueblo salvadoreño.

Un aspecto destacado de modo especial en la Plataforma Común, es el relativo a reconocer el poco valor del sufragio en aquel momento concreto de la situación del país, tan cargado de represión y anti-democracia.

Por el contrario, en la Plataforma no se encuentra nada respecto a los procedimientos de justicia a seguir en el caso de militares y civiles implicados en crímenes durante las dictaduras fascistas de Molina y Romero. Asimismo, no se constata ninguna referencia al papel de la Fuerza Armada, ni a la redefinición de este punto clave en la crisis del sistema político salvadoreño. Aunque la lucha no es contra el ejército, sino contra la oligarquía, bueno es recordar la función del aparato militar durante los 47 años al servicio del poder económico. La reestructuración de la Fuerza Armada es básica para cualquier arreglo de tipo nacional.

En septiembre de 1979, la modificación de la situación política imperante se intuía como proveniente de un golpe de Estado. Ninguna otra alternativa parecía factible en aquellas específicas condiciones. Es muy posible, entonces, que la omisión de estos puntos cuidara de no despertar conflictos innecesarios. Como quiera que sea, en la Plataforma se consideró al ejército como un

elemento "aislado" de la vida del país. Por otro lado, la ausencia de un proyecto bien planificado respecto a la Fuerza Armada, se haría sentir posteriormente. Claro está, no es el único factor, pero su ausencia tuvo una enorme importancia para la viabilidad o inviabilidad del proceso iniciado el 15 de octubre de 1979.

Hay que anotar, de paso, que el FORO POPULAR a pesar de aglutinar a los tres partidos de oposición y a once federaciones sindicales, no logró una real unidad en la dirigencia y en la base de las distintas organizaciones. El surgimiento del FORO se da como una necesidad histórica, como una mediación política, como una alternativa de unidad democrática-popular. El poco tiempo de ejercicio práctico de la unidad, impidió el desarrollo de una estrategia global y una táctica definida frente a los acontecimientos.

El Foro Popular nace en septiembre y el golpe militar se produce en octubre. No existió el espacio necesario para plantear y replantear un esquema de mayor profundidad. En muchos sentidos, en el FORO se condensan las ideas, inquietudes, aspiraciones y ambiciones de los grupos políticos de ascendencia democrática, frustrados por las experiencias electorales y golpeados por la exclusión oligárquica y militar.

El Foro Popular jugó su papel dentro de un tipo de unidad particular, en instantes en que las acciones nacionales e internacionales se inclinaban por la defensa y protección de los derechos humanos. El Foro Popular era el embrión de un movimiento de masas, neutralizado por los hechos golpistas de octubre. El pacto de la nueva organización con elementos de la juventud militar, para formar la primera Junta de Gobierno (Mayorga Quirós, Ungo) refleja todavía la tendencia pacifista y moderadora de sus dirigentes, a la búsqueda de una solución global a la crisis que azota al país.

1.3. Ascenso del Movimiento Popular (bosquejo de su Desarrollo).

En una periodización indicativa únicamente de una tendencia general, nos parece advertir dos grandes momentos en el desarrollo del movimiento popular. Un primer periodo se ubicaría de julio de 1972 a julio de 1977. El segundo periodo se iniciaría del 10. de julio de 1977 al anuncio de la unidad de las organizaciones populares de masas en diciembre de 1979.

Entendemos por movimiento popular de



masas, al amplio conjunto de organizaciones políticas, gremiales, sindicales, vinculadas orgánicamente al BPR, FAPU, LP-28 y UDN.

Por un rasgo propio del desarrollo político salvadoreño de los últimos diez años, la fuerza básica del movimiento popular ha surgido y se ha desarrollado en alguna medida fuera de los partidos políticos.⁴ Este rasgo subraya, con énfasis, el decisivo papel de las organizaciones de base.

Se trata, pues, de organizaciones con hondas raíces en grandes núcleos sociales. En el pasado inmediato, un conjunto de estas agrupaciones, actuando de modo separado, han adherido una perspectiva de izquierda radical, pretendiendo representar los intereses económicos, políticos y sociales de una clase determinada dentro de la sociedad salvadoreña. Otras, por su parte, han asumido los intereses de esa misma clase al interior de alianzas con otros sectores, detrás de proyectos reformistas, democráticos y de cambio.

El grueso, de esas organizaciones constituye una fuerza numérica significativa. Juegan un papel importante en el enfrentamiento y oposición a las dictaduras militares, ganando cada vez más la legitimidad perdida por otros sectores sociales.

Buena parte del desarrollo de estas organizaciones se ha hecho de modo separado, pero de conjunto, en ningún momento han perdido la iniciativa política popular. En ningún instante han descuidado la acumulación de fuerzas propias. En el curso de los últimos años, todos los frentes, bloques, ligas, han replanteado y mejorado su propio cuerpo de pensamiento, aunque

la fuerte dosis de marxismo-leninismo asusta a los estratos medios.

En el momento actual, todas las organizaciones populares de masas, representantes de la clase dominada, se adhieren a un proyecto democrático y revolucionario, coincidiendo en la necesidad de cambios radicales y profundos en la sociedad y aliados con sectores profesionales e intelectuales de la pequeña burguesía, cristianos y social demócratas de avanzada en lo que a ideología se refiere.

Esquemmatizados así algunos rasgos de las organizaciones populares, procedemos a esbozar el curso lineal de su evolución.

Ya desde los inicios del régimen de Molina comenzó a hacerse evidente la cualidad represiva de su gobierno, determinándose por ocupar la Universidad de El Salvador, no enteramente por eliminar la politización sino como un paso táctico enmarcado dentro de su proyecto de reformas (más "anunciadas" que reales) con represión.⁵ Como parte de las nuevas tácticas de "seguridad" se comienzan a manifestar las primeras "desapariciones" de líderes obreros y dirigentes de partidos políticos (UDN), claros intentos de "descabezar" a las organizaciones sindicales y políticas de sus cuadros de conducción. Otras medidas represivas y de control fueron dirigidas a ahogar toda forma de protesta social y organización entre los trabajadores del campo (Tres Calles, La Cayetana), así como el control del trabajo de comunidades de base de la Iglesia. Las amenazas a sacerdotes extranjeros, el hostigamiento a la organización magistral ANDES 21 de Junio, la creación de OMCOM para penetrar en las zonas marginales de San Salvador y la persecución de laicos trabajando en el campo de la promoción social, muestra el autoritarismo militar del régimen.

Toda esta ofensiva fue haciendo evidente a los cuadros dirigentes del movimiento popular, la necesidad de diseñar nuevas formas de organización y acción.

El primer período se caracteriza por un intenso trabajo de educación ideológica. Trabajo pleno en las bases⁶ con fuerte énfasis en la formación política de auto defensa. Se fortalecen las organizaciones existentes y se crean nuevas con el propósito de generar un trabajo sectorial, amplio y diversificado. La constante represión somete a prueba el esquema político-popular, demostrando su capacidad de absorción y su potencial de respuesta. La acción organizativa penetra a sin-



dicatos, gremios (maestros, profesionales, técnicos, etc.), asociaciones de campesinos sin tierra, pobladores de tugurios, estudiantes de secundaria y universitarios etc.

El movimiento de masas se consolida, en El Salvador, en razón directa al autoritarismo y represión del régimen, así como por las medidas políticas de control y exclusión de otras fuerzas en la lucha electoral y en la negación sistemática de la oposición económica legal de los sindicatos. El gobierno ha perdido el equilibrio entre el consenso y la coersión.

No se puede ignorar, también, que en esta etapa se fortalecen y adquieren presencia y fisonomía las organizaciones político-militares de tipo insurgente, tales como las FPL (1970), ERP (1972) y FARN (1975).

Estos grupos armados tienen la característica especial de haber logrado fuertes vinculaciones orgánicas con los frentes políticos de masas, situación diferente a la de otros países latinoamericanos.

En el período se impulsa la construcción de la unidad obrero campesina, así como la articulación con otros sectores sociales.

Para 1974-1975, el movimiento popular se ha reactivado, mostrando cierta operatividad y una presencia radical en la vida del país. Aparecen las organizaciones de masas FAPU y BPR, con diferente concepción y realización de la acción política concreta. Estas construcciones caminan separadas, asumiendo tareas de coordinación y proyección política de las masas.

Comienza a aparecer y regularizarse una diversificada prensa popular e insurgente, la cual sostiene una fuerte lucha ideológica. Se comien-

zan a desarrollar jornadas de luchas reivindicativas, en el sector agrícola, magisterial y estudiantil, logrando importantes movilizaciones en defensa de las necesidades populares inmediatas. Así también se plantean programas de lucha de clases, de más largo aliento.

En el segundo período, tanto el FAPU como el BPR, adquieren importante acumulación de fuerza y particularizan su estilo de acción. La aparición de las LP-28 en 1978, va a presentar un movimiento popular organizado más amplio, pero todavía dividido y receloso de las políticas frentistas, con otros movimientos de clase.

La estrategia de la lucha de clases del movimiento popular va a entrar aquí en una fase de abierto enfrentamiento al Gobierno del Gral. Romero. El gobierno de Romero carecía de un verdadero programa económico y social y estaba realmente desacreditado nacional e internacionalmente. Romero, por otra parte, es desmascarado y combatido tenazmente por un fuerte sector de la iglesia católica, comprometida en la línea de la teología de la liberación.

Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, quien asumiera el arzobispado de San Salvador el 22 de febrero de 1977, va a convertirse en la voz de los sin voz, en el defensor de los oprimidos y en un factor decisivo en la denuncia de la injusticia social.

Desde 1970, hay que anotar, la iglesia católica salvadoreña comienza a preocuparse por la problemática socio-económica del país. Monseñor Luis Chávez y González en la pastoral de conjunto, retoma los lineamientos del Concilio Vaticano II y de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, celebrada en Medellín en 1968, y

da pautas a los sacerdotes y laicos cristianos sobre el papel concreto que deben asumir ante la realidad, en afán de transformar la sociedad.

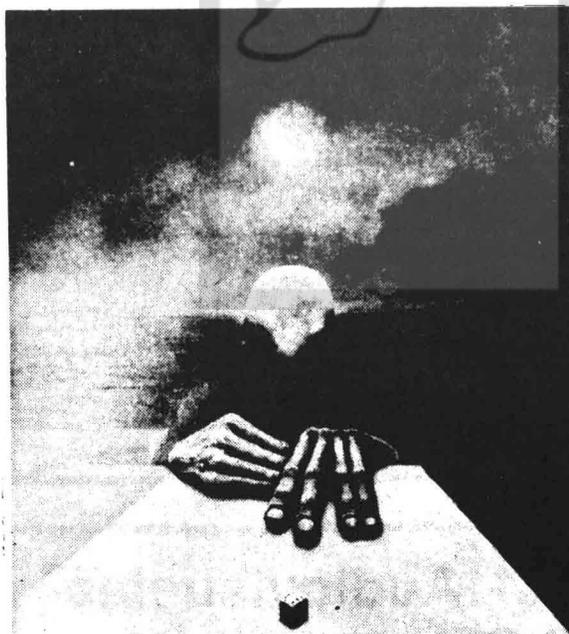
Monseñor Romero, al tomar posesión de la Arquidiócesis, se encuentra ya con la estructura de grupos y comunidades cristianas de base encarnadas en las líneas pastorales de Medellín. Su aporte, en circunstancias de persecución a la iglesia y al pueblo, consistirá en una toma de conciencia cristiana radical frente al autoritarismo y la injusticia.

De ahí que su pensamiento y acción pastoral se enmarque en una perspectiva diferente a la asumida por otros Obispos. Nos hallamos así ante un Arzobispo que trasciende el documento episcopal para convertirlo en vehículo de concientización y humanismo cristianos.

La posición de Monseñor Romero amplía el marco de operatividad de los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones populares y, sobre todo, de las grandes mayorías no adscritas todavía a los frentes, ligas y bloques.

Por su sensibilidad y su permanente contacto con los oprimidos, Monseñor Romero asumió un liderazgo indiscutible como pastor cristiano y como expresión de una voz unitaria, en sí misma, del cambio social.

La operatividad del movimiento es grande en este período. La movilización y la realización de cualitativos mecanismos políticos rescata de las cárceles a muchos detenidos políticos, arranca triunfos a las patronales, y logra sobrepasar los cercos informativos para desplegar densas acciones de denuncia internacional.



Todo este batallar impide al Presidente Romero consolidar su dominio y establecer su autoridad. Aún en el apogeo represivo, el movimiento popular expresa su fuerza de generación, fortaleciendo sindicatos, creando estructuras de lucha (Comité Coordinador de Sindicatos "José Guillermo Rivas" (1978), Federación de Trabajadores del Campo (1978), y otros núcleos de coordinación coyuntural o permanente).

En el período se producen diversas huelgas que afectan al sector económico. Se expresan amplios movimientos de solidaridad obrera y de unidad del pueblo, que sobrepasa a la dirección de las estructuras de masas. Estos movimientos quiebran la complementariedad patronal y el tutelaje del Estado, en áreas vitales de la economía, que paralizan al país (jornadas de febrero-marzo de 1979).⁷

El partido de izquierda UDN, con fuertes lazos orgánicos en la clase obrera y otros sectores sociales, reactiva, más que en el período precedente, sus organizaciones y figura en importantes luchas reivindicativas, así como en movilizaciones de protesta, denuncia y condena al fascismo.

En resumen, la estrategia del movimiento popular organizado, permitió que éste no fuera derrotado ni aislado por la represión que pretendía su desmantelamiento. Acumuló fuerzas e impulsó una sólida oposición a la dictadura de Romero.

Importantes jornadas se realizaron sin la unidad del movimiento popular. Sin embargo, el accionar de conjunto, hizo fracasar los supuestos previos del proyecto económico y social del régimen, es decir, la inmovilización del movimiento popular y la disciplina laboral. La opción esencialmente militar del régimen, amplió la represión y volcó a otros sectores al lado de la oposición.

1.4. El golpe de Estado del 15 de octubre.

Para octubre de 1979, el gobierno del General Romero se movía dentro de un conjunto de hechos que caracterizan un cuadro de deterioro institucional, impopularidad y aislamiento nacional e internacional.

Entre los hechos a que aludimos se encuentran los siguientes:

—Publicación en la prensa norteamericana del Informe de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, efectuada en Enero de 1979.

—Continuaba provisionalmente suspendida la ayuda militar norteamericana, así como se mantenía la presión en la forma de aprobación o censura a través de voceros estadounidenses a las realizaciones del régimen.

—Retiro de algunas misiones comerciales y diplomáticas (Japón entre otras del país).

—Amenaza de condena al régimen en la XIII reunión de la OEA, a celebrarse en La Paz, Bolivia, en octubre de 1979.

—Triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua (Julio de 1979).

—Creciente deterioro de la imagen internacional con motivo de la represión, agudizada y acumulada de 1972 a 1979.

—Firme posición del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero en defensa de los derechos humanos de la población.

—Descontento en sectores del gran capital que, originalmente, brindaron apoyo económico y político al Gral. Romero.

—Falta de credibilidad a las promesas de "apertura democrática", rotundo fracaso del "Diálogo Nacional" y rechazo del anuncio de celebración de elecciones "libres" en el futuro.

—Creciente polarización de fuerzas sociales en razón de la lucha ideológica, desatada a raíz del fracaso gubernamental.

En resumen, la situación salvadoreña experimentó en el curso de 1979 grandes tensiones. Un clima generalizado de expectación por una solución sustantiva se respiraba antes del 15 de octubre de 1979.

El esquema político salvadoreño de los últimos 47 años, muestra que la sociedad política ha estado controlada por una élite militar dirigente, cuyos momentos de recambio han coincidido con procesos de máxima pérdida de legitimidad,⁸ co-

nexas con necesidades de racionalizar el sistema de dominación y dependencia externa.

Los factores claves en octubre de 1979, parecen encontrarse en el fracaso de implementar el proyecto económico, así como en una crisis social incontrolable, potencialmente peligrosa como foco de insurrección popular dentro de un ya alterado círculo defensivo estratégico norteamericano.

El recambio, pues, se vuelve inevitable. Tiene como protagonista a la juventud militar que negocia el golpe de Estado.⁹ Las intenciones del cuartelazo eran, según lo expresa la misma Proclama de las FF.AA., abrir posibilidades a un camino democrático, substanciado con el importante apoyo de un conjunto de fuerzas de la sociedad civil.

Al ocurrir el golpe de Estado del 15 de octubre, una parte del efectivo popular, junto con otras fuerzas sindicales y políticas, sigue un proyecto unitario en torno a la democratización del país y la puesta en práctica de un programa mínimo de reivindicaciones que venga a aliviar el desmejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Este grupo de fuerzas se concentra en el Foro Popular (FP).

Fuera de él, se encuentra la significativa fuerza numérica del BPR, que no se adhirió a la Plataforma Común del Foro Popular.

Cuatro días después del golpe militar, el Foro Popular hace público los criterios de su participación en la Junta Revolucionaria de Gobierno. La Fuerza Armada por medio de sus representantes en el Cuartel San Carlos, Coroneles Jaime Abdul Gutiérrez y Adolfo Arnoldo Majano, aceptó las condiciones del Foro, relativas a tomar medidas efectivas para poner en libertad a los presos políticos e investigar el paradero de numerosos "desaparecidos"; cese inmediato del Estado de Sitio; reconocimiento del derecho de todas las organizaciones a participar en la solución de los problemas nacionales; regreso de los exiliados; profundización de las relaciones diplomáticas con los gobiernos de Nicaragua y Panamá; puesta en marcha de un programa de reformas económicas y sociales, encaminadas a devolver al país el equilibrio necesario para una convivencia pacífica. El documento del Foro ajustaba, curiosamente, con la Proclama de las Fuerzas Armadas, emitida el propio día de la insurrección militar. El plan del Foro se aprobó, incluso, siendo ya Ministro de Defensa el Coronel José Guillermo García.

La participación del Foro Popular se caracterizó:

1) Mantuvo su independencia de criterio y acción respecto de la JRG; 2) Designó un representante en la JRG, cuya gestión era garantizar el cumplimiento de la Plataforma Común; y 3) Fue el organismo de consulta para la integración del Gabinete, Corte Suprema de Justicia y los órganos del poder municipal.¹⁰

El carácter represivo de la JRG manifestado desde el primer día del golpe, desbordó los límites de la unidad concertada por algunas organizaciones populares, las cuales dejaron rápidamente el Foro Popular. En todo caso, un conjunto de fuerzas representando a los partidos políticos, los sindicatos y sectores democráticos de la pequeña burguesía, ofrecieron su apoyo a la JRG y trabajaron por lograr condiciones de participación y manifestación del pueblo, como condición para avanzar en la búsqueda de soluciones a las necesidades más urgentes del país.

El pronto divorcio de la juventud militar con la Plataforma del FORO, condujo al debilitamiento de los postulados de la Proclama de la Fuerza Armada y al retorno al viejo esquema de reformas con represión. En tales circunstancias, la JRG (encabezada por Mayorga Quirós, Ungo y Andino, este último representante de la pequeña empresa) se vio, poco a poco, sin apoyo popular, acosada por la oligarquía a través de los medios de comunicación, manifestaciones públicas, e intentos de golpes de Estado, manipuleo del sistema financiero y obstrucción de los programas reformistas, así también por la izquierda radical ya por entonces bastante polarizada y a la búsqueda de imponer su propio proyecto político.

El movimiento de octubre, como se observa, estaba limitado dentro de factores de seguridad interna, y márgenes imprecisos de reformas a las cuales, incluso, se oponían los altos mandos militares, según trascendió a los medios políticos en ese momento.

La crítica situación política y social, habla acumulado tal nivel de problemas, que sobrepasaba con mucho un intento de reformas sin represión. Por otro lado, el golpe no eliminó el sistema de seguridad tradicional del Estado. Es más, el aparato burocrático militar, como era lógico esperar, conservó la estructura jerárquica, el mando paralelo o dual que señalaron los Ministros renunciando en la crisis de diciembre, quienes definieron las cosas desde la parti-

da. El ultimatum de los ministros de la primera JRG tiene el mérito indiscutible de aclarar la situación, previa a cualquier cambio estructural.¹¹ Es la primera vez en la historia del país que un equipo civil abandona el aparato burocrático del Estado para decir al ejército: **basta**. Los militares se darían cuenta que ellos sólo no pueden gobernar el país, y menos como lo venían haciendo hasta entonces. La renuncia de los civiles, más ética que política, contribuyó a crear conciencia en todos los estratos sociales. Altos mandos del ejército recapacitarían después sobre este hecho histórico, pero sería ya tarde.

Nuestra percepción es que se necesita con urgencia establecer una clara diferencia entre sociedad civil y sociedad política, a manera de que cada sector ocupe el lugar que le corresponde en una efectiva transformación de El Salvador.

La creciente represión mantenida por los cuerpos de seguridad, a espaldas incluso de la misma JRG, mostró rápidamente, que se trataba de un proyecto de democracia restringida resguardado por la fracción militar derechista, temerosa de perder el control y que las cosas llegarán más allá de los límites fijados al recambio. Algunos elementos de la Fuerza Armada, en asociación con representantes de la burguesía financiera y comercial, no dudaron en reducir el respaldo que les daban los sectores democráticos y progresistas, agrupados en el Foro Popular y prosiguieron su objetivo sustancial de dismantelar el movimiento revolucionario, tratando de compensar la pérdida de apoyo con una alianza bilateral con la DC, que ya daba signos de descontento por sentirse insuficientemente representada en la JRG.

Las masas, desde el momento del golpe, se agruparon en la resistencia y pasaron al enfrentamiento abierto y a la toma de la iniciativa política a partir de jornadas de lucha reivindicativa, denuncia y desenmascaramiento. Desde un inicio, las organizaciones (BPR, FAPU y LP-28) desconfiaron del movimiento militar, en base a la experiencia histórica nacional. Los distintos cuartelazos han sido meros reflejos de acondicionamiento del bloque en el poder, para seguir manteniendo y fortaleciendo la dominación oligárquica. El ejército no ha jugado el rol correcto en defensa de la autonomía relativa del Estado. El golpe militar, llamado en varias ocasiones, "revolucionario", ha terminado en verdadera traición a las masas populares. Este elemento de juicio obligó al retiro inmediato del Foro a varias

organizaciones y a la rectificación posterior de otras.

Habría que distinguir por otro lado, entre la constitución de la primera JRG y su plan de "reformas con respaldo popular" y la segunda JRG a partir del pacto del ejército con la DC, en virtud del deterioro y fracaso del proyecto político del 15 de octubre de 1979. Los hechos indican que la "derechización" del proceso es culpa de algunos líderes militares, educados en el anti-comunismo y la servidumbre a la "seguridad nacional", más comprometidos con la línea dura del Pentágono que con los intereses de la nación salvadoreña.

El nuevo recambio se produce a principios de Enero y al igual que la primera JRG, gozó del respaldo norteamericano. La marca demócrata cristiana jugaría un importante rol a nivel internacional, donde se presentaría como una posición tercerista en medio de intransigentes extremas. El segundo recambio fue consciente de que el monopolio represivo podría traer molestias "inevitables", ocasionadas por la oposición polarizante. El plan original de octubre continuó igual; ello no obstante, las exigencias de la DC

relativas a definir mejor el programa de reformas, la modificación constitucional y otros puntos que ajustaban la propuesta de la DC a la Proclama de la FF.AA. Aspecto principal en la propuesta de la DC era el punto relativo a que la JRG ejerciera **plenamente** la Comandancia de la FF.AA. que, según el precepto constitucional recae en el Presidente de la República, en este caso, en los miembros de la JRG.

Todos estos elementos de negociación fueron aceptados por la FF.AA. Poco tiempo bastó, sin embargo, para demostrar que la argumentación jurídica utilizada para controlar el aparato militar no pasaba de ser un aspecto formal, pues la FF.AA., en esta etapa, no se identificó ni subordinó a la política específica de la JRG. En el fondo, la FF.AA. ha sostenido y sostiene que la unidad de mando debe estar en manos de un militar (hasta ahora de hecho en el Ministro de Defensa) y no en un cuerpo colegiado y disímil como es la JRG. Este punto es crítico y da lugar a diferencias entre civiles y militares. La creación del Consejo Permanente de las FF.AA. (COPEFA) y su breve intervención en asuntos político-militares, es muestra suficiente de que en



el ejército no es posible la co-gestión ni las interferencias de ningún tipo a la jerarquía vertical ya establecida.

El poder castrense no aceptó la ingerencia de extraños al **corpus** militar, superando la crisis mediante el expediente de las renunciaciones y los retiros de los colaboradores civiles.

En la práctica se continuó ejerciendo un poder paralelo —como en la primera Junta— que en definitiva determinaba la dirección política del país, reafirmando el proyecto externo de resguardar la democracia liberal restringida y contener a las fuerzas sociales que pudieran impulsar cambios profundos y revolucionarios.

La renuncia de uno de los Miembros de la segunda JRG y de varios ministros de mayor apego a la línea social cristiana, demostró nacional e internacionalmente que las reformas no eran las esperadas por el pueblo, ni siquiera por la propia DC, y que lo que prevalecía era la represión desnuda contra las organizaciones políticas, populares y religiosas. El hecho de que el ala derecha de la DC se quedara en el gobierno e, incluso reforzara sus cuadros con su máximo líder de 1972, el Ing. José Napoleón Duarte, evidencia que el voluntarismo juega un rol singular en el recambio operado en el aparato del Estado tras el derrocamiento del general Romero. La salida de funcionarios democristianos, a los que no puede acusarse de “comunistas”, contribuyó también a verificar la conciencia de que la anormalidad del sistema rebasa el mero cambio de personas en el gobierno. Es el sistema mismo el caduco, el obsoleto. En tales condiciones, la solución política no puede estar determinada por el estamento militar, sino por los políticos que representan e interpretan la voluntad de las fuerzas sociales, legítimamente organizadas.

A la reforma estructural debe seguir la inmediata separación entre la sociedad política y la sociedad civil, a fin de superar la crisis que padece el país.

En el contorno de este proceso aparece y ha seguido su curso la unidad popular. Mientras la JRG manifestaba una acelerada crisis política, las mayorías organizadas lograban llegar a la constitución de la Coordinadora Revolucionaria de Masas. Factores de orden interno y externo, hacen evidente la necesidad de un frente común y la propuesta de un proyecto que logre atraer a su seno a la mayoría no organizada del pueblo salvadoreño. La unidad construida en torno a CRM no es, ni mucho menos, total. Representa un es-

fuerzo racional por canalizar las expresiones políticas organizadas y atraer a sectores medios, temerosos de que continúe la desestabilización. El acercamiento a otros grupos de parte de la CRM, en base a la Plataforma Programática como proyecto preliminar y en fase de discusión, indica una apertura moderadora en sí misma respecto a posiciones que hace unos meses parecían inflexibles y cerradas.

2. Contexto en que surge la Coordinadora Revolucionaria de Masas.

2.1. La situación internacional:

Al producirse el anuncio de la unidad del movimiento popular salvadoreño (diciembre de 1979), la atención mundial se concentraba en los acontecimientos de la revolución iraní, y en la intervención de la URSS en Afganistán.

Como efecto de esos sucesos las relaciones entre los EE.UU. y Rusia se deterioran, entrando en crisis la política de distensión. Se entra a un período de grave amenaza para la paz mundial y, naturalmente, de conflictividad ideológica y política en distintas áreas de los llamados bloques de poder internacional.

Eso, por una parte. En otro sentido la nación norteamericana, de indiscutible influencia en América Latina, se prepara para las futuras elecciones presidenciales de 1981. La política Carter de derechos humanos, combatida por el Partido Republicano, sufre graves confrontaciones en el contexto mundial. Centro America, y en particular El Salvador, se ven afectados a cortísimo plazo por los sucesos políticos estadounidenses y por el creciente anti-comunismo de núcleos decisivos en la política interior y exterior de ese país. Intentaremos, una aproximación al problema, de interés como factor externo en el proceso político salvadoreño.

Al desencadenarse la lucha eleccionaria en EE.UU., aspectos fundamentales de la política exterior de ese país sufren modificaciones. En la actualidad, por ejemplo, senadores norteamericanos comienzan a anunciar su disposición a usar la fuerza militar, incluso atómica, para hacer frente a la amenaza soviética. La escalada armamentista tiene lugar en plena crisis de Irán y aún antes de la intervención en Afganistán. A principios de diciembre, voceros soviéticos expresaban su preocupación por el aumento del “balance estratégico del poder”, representado por el des-



plazamiento de nuevas armas nucleares en Europa por parte de la OTAN, complicando el sector norte del continente europeo en conflictos entre las super-potencias.¹² Poco después del 15 de diciembre, el Pentágono enviaba una misión al Golfo Pérsico y Océano Indico, en prospección y para establecer disponibilidad de un mayor uso de puertos y bases.

Luego de la intervención soviética en Afganistán, han seguido sanciones económicas y diplomáticas contra la URSS, la restricción de intercambios culturales, así como la prohibición de exportaciones de ciertos materiales considerados de uso estratégico, el boicot de los Juegos Olímpicos y suspensión de las discusiones relacionadas con el Tratado Salt II.

La URSS, por su parte, ha anunciado su disposición de defenderse de cualquier "agresión armada", incluyendo el posible uso de armas nucleares "tácticas".

El conflicto tiene, claro está, repercusiones en América Latina. De hecho, en los últimos años, los EE.UU. han asistido a una disminución de su influencia y dominación en el área de Centroamérica y el Caribe. Varios pequeños países se han salido del cuadro de la influencia norteamericana (Guyana, Grenada, Santa Lucía, además de Cuba). A ello hay que agregar el temor de que Nicaragua tome un camino de desarrollo independiente, reduciendo aún más el poder militar subordinado, representado por el CONDECA.

Después del establecimiento de poderosas bases militares en la Florida, es decir, en un punto muy próximo a Centro América, las últimas maniobras del Pentágono descubren la tendencia a promover en la región centroamericana el incentivo y refuerzo, en armas y técnicos, a los ejércitos de la zona, en apoyo de una línea abortiva y preventiva de los movimientos populares. El Pentágono, la CIA y los Senadores conservadores ven "comunismo" en las manifestaciones reivindicativas de las clases proletarias centroamericanas y, aunque han perdido a su ahijado el dictador Somoza, consideran que es un error tolerar y apoyar las revoluciones democráticas del istmo. Los proyectos que tienden a derrocar a las dictaduras militares, con el propósito de definir proyectos de desarrollo independiente y reafirmar el derecho a la autodeterminación, son objeto de rechazo por los grupos políticos reaccionarios de EE.UU. Sobre este aspecto volveremos después al analizar la posición del asesinado Arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

El apoyo en gran escala a la JRG, anunciado por voceros de los EE.UU. desde el mismo día del golpe y las conductas políticas posteriores (ayuda militar y financiera), ponen de relieve la nueva línea estratégica norteamericana que subraya el aspecto preventivo y desmovilizante del gobierno de la JRG. El excanciller de la República de Costa Rica Gonzalo Facio, en diciembre de 1979, expresaba su opinión de que los

EE.UU. había actuado con "inteligencia" al brindar su apoyo a un gobierno que dirigiéndose hacia una "apertura democrática", prevenía una revolución.¹³

Así, bajo los signos de la vuelta a la guerra fría, el endurecimiento de la hegemonía norteamericana y la estimulación del militarismo, transcurre el anuncio de la unidad popular y su posterior concreción en la Coordinadora Revolucionaria de Masas (diciembre 79 y enero del 80), y luego la creación del Frente Democrático Salvadoreño (FDS) el 1 de abril de 1980. Esta última organización se forma bajo la iniciativa del Movimiento de Profesionales y Técnicos Independientes, el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), el ala disidente de la Democracia Cristiana, FENAPES, la UCA, la Universidad de El Salvador, y algunas centrales obreras que no pertenecen a los grupos reunidos en la CRM. El Frente Democrático Salvadoreño, dada la velocidad de los acontecimientos y a pesar de su composición de clase y pluralidad ideológica, pronto desaparecerá para instalarse en un mismo programa de la CRM, en el Frente Democrático Revolucionario.

2.2. La situación en Centroamérica.

El informe "Centroamérica en la encrucijada" del Secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Viron Vaky, formulado a mediados del año pasado, planteó con toda claridad que los países centroamericanos atraviesan una grave crisis política, reflejo —añadimos nosotros— de una también grave situación económica.

El proceso del MCCA que surgió hace 18 años con el patrocinio norteamericano como alternativa de desarrollo frente al hecho de la Revolución Cubana, alcanza su mayor punto de expansión en 1966-1967, y entra a partir de entonces en una fase de recesión que se prolonga hasta nuestros días.¹⁴ El balance actual presenta los rasgos de una estrategia que condujo a reconcentrar la riqueza y el ingreso, en lugar de mejorar su redistribución, creó problemas en la balanza de pagos, así como endeudamiento público y privado externo,¹⁵ volviendo más vulnerable la economía de la región a la penetración de las transnacionales.

Se observa en efecto, que estas corporaciones le han asignado un papel de especialización a nuestras economías como abastecedoras de materias primas y productos en la industria de

tope. Por otra parte, han estimulado un modelo de subcontratación industrial para la exportación, que conlleva la explotación de la abundante mano de obra centroamericana, así como el beneficio de incentivos fiscales, energía y otros "estímulos" que en definitiva resultan ajenos a los intereses de los países de la región.

A ello se suma el apoyo a los regímenes autoritarios, con su congénita propensión a violar los derechos humanos como condición para mantener el dominio y la exclusividad política.

En suma, el proyecto del MCCA, lejos de propiciar un proceso de democratización económica, política y social, agudizó la dependencia económica, aumentó la marginalidad social y contribuyó indirectamente a la lucha de clases,¹⁶ tal como lo muestra el ascenso del movimiento popular en varios países. En la región se ha producido un despertar de las masas, que buscan liberarse de las tradicionales tiranías militares, de las reformas y proyectos que no resuelven las necesidades vitales. El pueblo centroamericano busca en este momento histórico romper la dominación política, diseñar programas de esencia y carácter revolucionario que reafirmen la autodeterminación.

Este es el significado de la lucha de los obreros guatemaltecos contra la sangrienta represión anti-sindical provocada por las patronales guatemaltecas, de los campesinos indígenas explotados como los de Panzós, reprimidos para inmunizar de toda protesta social una rica zona de materias primas donde tienen enormes intereses la burocracia militar, la oligarquía y las corporaciones transnacionales. Por defender a los campesinos y al pueblo explotado y reprimido, es que se persigue a los sacerdotes y religiosos.

Mientras el régimen mantiene el curso invariable de su política represiva como lo mostrara con los trágicos acontecimientos de la Embajada de España en Guatemala, en el mes de febrero, crece negativamente su imagen ante la opinión pública internacional, y se advierten gestos como la anunciada renuncia del Vice-Presidente de la República Villagrán Kramer. Sin embargo, el aspecto principal lo constituye el ascenso del movimiento popular de resistencia que comienza a expresarse en bloques y frentes clasistas, ideológicamente definidos dentro de un socialismo latinoamericano, a veces recargado de marxismo-leninismo, generalmente orientado a devolver a las masas su propia identidad histórica y su dignidad nacional en el mundo moderno. El

hecho es que la tendencia política se da como fruto de una larga y prolongada lucha y que desconocer sus raíces, sería ignorar la razón y el sentido del mismo proceso social.

En Honduras, el recambio militar del triunvirato ocurrió con mucha anticipación y operó en un país con un menor nivel de acumulación de problemas. Curiosamente, poco después del triunfo sandinista en Nicaragua, se produjeron una serie de conflictos en la frontera honduronicaraguense, dentro de un esquema de amortiguación preventiva de la revolución sandinista. A fines del año pasado, las cosas llegaron a un serio estado de tensión en las relaciones diplomáticas de los dos países. Internamente, Honduras ha visto aparecer movimientos revolucionarios con proyectos radicales para solucionar los problemas económicos y sociales del país. La "salida electoral" se ha convertido a corto plazo en una solución, aunque como es la constante en Centroamérica, estos mecanismos resguardados por los militares, se revierten a mediano plazo en procesos caóticos, imposibilitados de desarrollar proyectos de desarrollo social acorde con las necesidades populares. Mientras tanto, los EE.UU., han anunciado sus intenciones de estimular el armamentismo de los militares hondureños, ampliando su papel de amortiguador frente a Nicaragua y El Salvador, lo cual coincide con el apoyo decisivo a la dictadura militar guatemalteca.

En El Salvador, el proyecto de recambio ha caído en una acelerada crisis. La opción militar de "tibias reformas con represión", ha acabado por provocar la unidad popular y democrática, poniendo al descubierto la inviabilidad de los proyectos de democracia restringida, hegemonizados por los altos mandos del ejército.

El modelo político salvadoreño, ha entrado a su fase final de agotamiento. La "democracia cafetalera", que permitió a los militares desde 1931, el control restringido de los aparatos burocráticos del Estado burgués, no funciona ya más. La oligarquía no puede mantener la tradicional dominación y el ejército mismo, que le fuera leal y servidor por tantas décadas, carece de capacidad y credibilidad para hacer viable el proyecto anti-histórico de "cambios sociales" con persecución, muerte, ametrallamiento y secuestros. Las revoluciones, evidentemente, no pueden hacerse desde arriba, sino con el apoyo y el consenso popular.

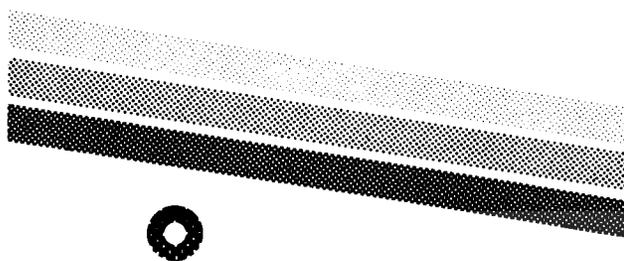
En Nicaragua, luego de su heroica lucha

contra la dictadura personal de Somoza, los datos periodísticos ponen de relieve las dificultades del Gobierno de Reconstrucción, omitiendo que Nicaragua heredó el deterioro económico y social del saqueo somocista. Según cálculos conservadores, los Somoza extrajeron una fortuna de 800 millones de dólares.¹⁷

Nicaragua está poniendo fin a la explotación oligárquica. Con gran esfuerzo trabaja en un proceso de desarrollo autónomo, ante la indiferencia internacional y las presiones y amenazas de aislamiento económico y financiero, en momentos de expansión del militarismo norteamericano en la región. El ejemplo nicaragüense ha contribuido a acelerar el proceso salvadoreño, tanto en la aplicación de tácticas y estrategias de lucha, como en la conformación de alianzas de clase y fracciones de clase que permiten ampliar la base social de apoyo a una revolución nacional, ya no enmarcada en una rígida ideología, sino enriquecida por la propia realidad salvadoreña.

Se observan en Centroamérica importantes cambios en las masas, expresando una mayor conciencia de ser partícipes de sus propios proyectos de desarrollo, rechazando el modelo externo de "seguridad nacional" abiertamente violatorio de los derechos humanos. Hay una actitud consciente, de repudio y rechazo, al modelo de dominación burguesa. El imperialismo es constantemente denunciado y combatido a todos los niveles. A la acción de los grupos de masas se une la capacidad crítica de las universidades y, en forma particular, se une la voz y la conciencia de una iglesia católica que se vincula cada vez más al pueblo, a pesar de que la renovación en la institución teológica, es lenta y presenta problemas singulares entre el poder político del Estado y las distintas jerarquías eclesiásticas.

Centroamérica ha alcanzado en los últimos tiempos, una enorme importancia estratégica, que se acompaña de una creciente militarización interrelacionada con las tensiones internacionales que atraviesan los EE.UU. Pocas veces los regímenes autoritarios del área, han merecido tantas y repetidas manifestaciones de apoyo norteamericano. La creciente expresión de pueblos que desean vivir en democracia, constituye un "reto para la capacidad creativa de los Estados Unidos", como expresara W. Bowdler,¹¹ capacidad creativa que no ha resultado otra cosa que una "democracia restringida" resguardada por los militares. Hacia ese objetivo, los derechos humanos son supeditados a las conveniencias de



conjunto del imperialismo en el área, bajo el maquillaje reformista introducido desde el exterior.

La importante significación de la unidad popular en El Salvador, ocurre en momentos en que Centroamérica entra a una militarización, superpuesta a las razones de hegemonía y predominio norteamericano en la región. La inviabilidad del proyecto autoritario reformista que se ensaya en el más pequeño de los países de Centroamérica, es evidente. Carece de apoyo popular, es respaldado y resguardado por el gobierno norteamericano (financiera, militar, diplomáticamente), que se juega, en el caso salvadoreño, sus intereses en el conjunto de la estratégica área centroamericana. He aquí una pequeña muestra.

Diversos ejemplos pueden citarse de intervención norteamericana en el proceso político del país. Desde las declaraciones últimas de Nixon y Kissinger en las que abiertamente se pronuncian por el uso del potencial militar instalado en Panamá, hasta el envío de armamento sofisticado para contener el descontento popular. La aprobación de más de siete millones de dólares para asistir al ejército regular constituye prueba elocuente de la política dual del Departamento de Estado que, por una parte se preocupa por el cambio estructural y la implantación de reformas agrarias y financieras, y por otra aconseja y asesora al aparato represivo concentrado en las filas más desprestigiadas del ejército.

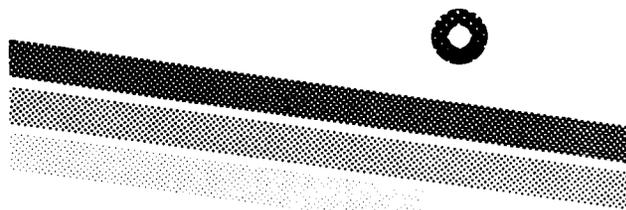
Llama la atención, para el caso, las opiniones del Embajador Robert E. White vertidas en una reunión de la American Society of El Salvador, el 19 de abril de este año, en las que tras de sostener que hay un cambio fundamental de la política exterior de EE.UU con sus aliados y vecinos, indica que su gobierno está dispuesto a ayudar a la JRG en el proceso de democratización, estabilización social y económica, a fin de evitar las consecuencias de un desplome institucional que coloque al país en el camino del desastre.¹⁹

El mensaje de White es explícito en señalar que la responsabilidad de lo que ocurre en El Salvador es culpa de las clases dominantes, las cuales carecen de un programa económico y de un proyecto político a futuro. No tienen alternativa que ofrecer, excepto el mantener sus privilegios e intentar el golpe de Estado para volver al pasado, en un retroceso de mayor violencia institucional y represiva. "La extrema derecha salvadoreña, dice White, no tiene futuro. Esta moribunda".

El análisis del Embajador White es esclarecedor en varios puntos. El primero que la Administración Carter no intervendrá con tropas y efectivos en el conflicto doméstico entre las guerrillas y el ejército, caso la situación se diera a gran escala. El segundo, la opción por las soluciones pacíficas mediadas por una reforma integral que modernice el sistema económico y humanice las relaciones sociales de producción, evidentemente bajo el esquema de la alianza de la democracia cristiana con los altos mandos de las FF.AA.

La cuestión no nos parece tan simple. La percepción del Embajador White, a quien ya empiezan a acusar de comunista, falla al situar la solución del conflicto en un centro ahora inexistente en El Salvador. La crisis global no permite el centrismo de ningún tipo. Es demasiado tarde querer apagar el fuego, sin clarificar primero que en medio no hay ninguna fuerza social, base o apoyo interno, como lo hubo en el pasado. La velocidad del proceso conduce a uno de los polos, la derecha sin ninguna bandera y sin ideales populares, o la izquierda, en sus distintos matices, aglutinada en una iniciativa política desestabilizadora y francamente en ascenso hacia la toma del poder.

Es oportuna la cita que hace el Embajador White: "The privilege of the great powers is to watch catastrophe from the terrace", aunque en este caso la tragedia sea, precisamente, la nuestra.





La solución ante el desastre tiene que ser nacional, revolucionaria y radicalmente democrática. No caben las intervenciones foráneas, ni la copia mecánica de otros esquemas. La viabilidad reside en la mayor dosis de salvadoreñidad posible, tanto en las medidas políticas como económicas.

Tenemos la impresión de que en el seno del ejército no todos los oficiales aceptan la supeditación en forma fatal y estiman posible una relación autónoma, independiente, de nuestro país con otras naciones. Tal pensamiento abriga la idea de la democratización y nacionalización de las FF.AA. en la medida en que el propio pueblo así lo exija.

El hecho sirve, afirmamos, para despertar el nacionalismo y los anhelos de verdadera independencia del pueblo salvadoreño. Sirve, efectivamente, para la construcción de la perspectiva unitaria, aunque ese no sea el propósito de las opiniones oficiales de los funcionarios norteamericanos que muchas veces exacerban el ánimo de izquierdas y derechas.

3. Nuevo cuadro político en el país.

3.1. De la fundación de la CRM a la conjunción de fuerzas en el Frente Democrático Revolucionario.

Los cuatro primeros meses de 1980 han transcurrido en torno a una rica dinámica social. De una parte, la crisis de la Junta Militar Demócrata Cristiana. En el campo económico las

inversiones productivas se han reducido de modo importante; crece el desempleo y pequeños y medianos empresarios afrontan una delicada situación. La economía nacional "está llegando al máximo de tolerancia", como advirtiera recientemente el Presidente de ANEP. El cierre de fábricas y negocios es innegable. La falta de liquidez y circulante, nos coloca ante la perspectiva de la devaluación, caso no llegaran pronto al país los préstamos en dólares ofrecidos por el gobierno de Carter. El ambiente está tenso y cargado de todo tipo de especulaciones, a raíz de los decretos de reforma agraria, y desaparición del régimen de arrendamiento de tierras o aparcerías. La reestructuración bancaria no parece satisfacer la orientación de un nuevo tipo de sociedad y la fuga de capitales, a pesar de los esfuerzos del Estado, continúa dentro de una creciente paralización de la actividad económica. El pueblo no se siente representado por dos posiciones tan minoritarias como son los militares y la fracción civil democristiana. A la carencia absoluta de apoyo popular, se suma la incoherencia y la falta de eficacia de medidas de recuperación o reactivación económica.

La crisis política de la primera semana del mes de enero logró una recomposición parcial bajo el pacto político de la DC y las FF.AA. El modelo autoritario sin embargo, larga y fuertemente enraizado en el poder, mantiene fuertes remanentes que continúan obstaculizando las buenas intenciones del sector honesto de la DC y la fracción democrática del ejército, agotándose rápidamente las escasas perspectivas del nuevo proyecto.





Las posiciones mantenidas por el sector de-rechista gravitaron en el sentido de endurecer el anticomunismo, aumentando la represión en un sentido favorable a quienes siempre han detentado el poder económico y político en El Salvador.

No obstante, al producirse la confrontación interna entre los demócratas cristianos disidentes y algunos mandos militares la vieja guardia del PDC hace tabla rasa de una larga experiencia y decide jugar la carta contra el movimiento popular y las reformas con respaldo de masas. Es decir, se "enrumba" por cambios verticales bajo cuyo pretexto se ensangrienta al país.

El gobierno "revolucionario democristiano" no ha logrado transformarse en un movimiento con suficiente base social, y lo que es más, no da pruebas de conquistarla. Los últimos acontecimientos son una muestra de que sus pasos, por reacción, consolidan las posiciones de los sectores conservadores que permanecen en la retaguardia.

La sistemática eliminación de elementos de oposición, el asesinato de Monseñor Romero, el Estado de sitio, el cierre a la información, la persecución y hostigamiento de los periodistas extranjeros, el desmentido de los enviados eclesiásticos a los funerales de Monseñor Romero, han creado fuertes protestas en la comunidad internacional, y reducido considerablemente la imagen de la segunda JRG.

Por su parte, el movimiento popular ha mostrado una actitud política coherente y creadora. Aglutina sus fuerzas el 11 de enero (fundación de la Coordinadora Revolucionaria de Masas), pasando de una situación de convivencia y diálogo a la aplicación de esfuerzos comunes (manifestación masiva del 22 de enero), hasta ofrecer un programa político que compatibiliza las aspiraciones del movimiento popular con las propias de los sectores democráticos (presen-

tación de la Plataforma del Gobierno Revolucionario Democrático) el 26 de febrero de 1980. Hay que advertir, dentro de las vicisitudes del proceso, que la unidad está en un período de construcción. Hay todavía recelos, absolutización de grupos, lucha interna por la hegemonía y por alcanzar la adecuada compactación. Esto hay que señalarlo para evitar el triunfalismo, la maximalización de la alternativa popular que apunta hacia el futuro.

A partir de la crisis de la JRG de la primera semana de enero, una densa gama de sectores democráticos e independientes, se encuentra sin mayor posibilidad de maniobra política y representación. En primer término porque la unidad del Foro Popular se rompió, dispersándose sus fuerzas; una hacia el proyecto del pacto político DC con la Fuerza Armada, otras hacia la vertiente del movimiento popular.

En un país donde el pueblo, siempre que ha tenido oportunidad se ha pronunciado mayoritariamente por los cambios, la democracia y el progreso social; donde la forma normal de toma del poder político ha sido el golpe de Estado y las farsas electorales que han frustrado al pueblo con los fraudes y la imposición, además del incumplimiento de promesas programáticas, la redacción de un nuevo esquema reformista con hegemonía militar como el planteado por la Junta Militar Demócrata Cristiana no es, obviamente, aceptable para una nación consciente de sí misma. Esa es la realidad y a ella hay que acudir en demanda de respuesta.



La unidad de los sectores populares ofrece así una relación positiva de fuerzas, a más de que su proyecto político muestra un conjunto de importantes condiciones programáticas percibidas por numerosos sectores como susceptibles de abrir un camino justo y estable para el país.

La integración, por otra parte, de los grupos armados en una sola estrategia insurreccional y mando único, profundiza aún más las condiciones de lucha popular y abre la perspectiva de una solución militar a la crisis general. La situación es explosiva y produce un enfrentamiento intensificado entre la guerrilla y el ejército.

El llamamiento formulado por la CRM a todas las capas sociales del país, moviliza a diversos sectores democráticos e independientes que dinamizan su unidad en el Frente Democrático Revolucionario (FDR) que hace suya en principio la Plataforma de Gobierno de la Coordinadora Revolucionaria de Masas. Esta manifestación de consenso es paso de avance en la conjunción de fuerzas sociales decididas a imprimirle a la lucha popular un nuevo carácter.

El Frente Democrático Salvadoreño, creado como dijimos el 1o. de abril, se inclinó pronto por un pacto global con la CRM en una acción que permite visualizar algo más que la unión momentánea de grupos, partidos, frentes, universidades y gremios. Es un hecho que, en menos de

18 días, los "sectores democráticos" optan por la alternativa unitaria y popular, más allá de las diferencias substanciales de ideología y proyectos políticos particulares. Pudiera haber en este pacto algo de precipitación, dado que la identidad y fuerza propia de las organizaciones democráticas no están debidamente clarificadas y, en el futuro, podría suscitar rupturas o enfrentamientos. Desde ya hay que reconocer que en el FDR hay dos tendencias, dos posiciones aproximativas: una, la democrática y otra la revolucionaria. Ambas no son excluyentes. En la medida en que coincidan en un modelo económico y en un proyecto político real y efectivamente surgido de la fusión de fuerzas, generador de unidad al interior de todas las capas sociales, sin sectarismo, y más bien orientado a devolverle a la **nación** su integridad de justicia y su independencia, las posibilidades de acción serán mayores.

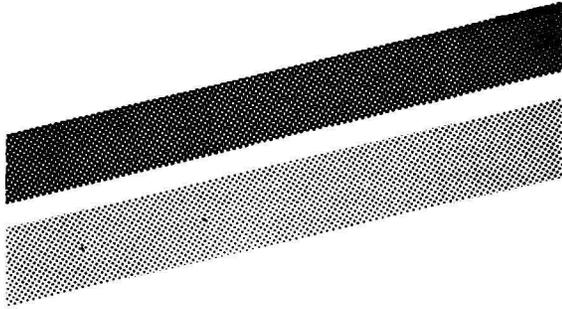
Recogemos el dato histórico, tal cual se dio, en un país altamente polarizado y frente a inevitables definiciones de las fuerzas sociales en pugna.

La amplia conjunción de fuerzas que se inscriben en el FDR, presentan, por el momento una definida opción por la libertad del pueblo salvadoreño y la construcción de una sociedad justa, libre e independiente.

El Frente Democrático Revolucionario (FDR) quedó formalmente integrado el 18 de abril de 1980 por las siguientes organizaciones:

- Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) que aglutina al FAPU, LIGAS 28 de Febrero, BPR y UDN
- Movimiento de Liberación Popular (MLP).
- Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) de tendencia socialista-democrática.





- Movimiento Independiente de Profesionales y Técnicos de El Salvador (MIPTES), (con muchos elementos de la primera JRG).
- Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC), disidentes de la DC en la actual JRG.
- Federación Sindical Revolucionaria (FSR).
- Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS).
- Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS).
- Federación Sindical de Trabajadores de la Industria del Alimento, Vestido, Textiles Similares y Conexos de El Salvador (FESTIAVTSCES).
- Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS).
- Sindicato Textil de Industrias Unidas S.A. (STIUSA).
- Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS) y,
- Universidad de El Salvador.

Como miembros observadores se encuentran la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) y la Federación Nacional de la Pequeña Empresa (FENAPES).

El conjunto de sectores movilizados por el FRD, constituye en la hora actual un potencial político y social hasta ahora no conocido en la historia del país. Todas las fuerzas de izquierda se conjugan en una organización que cuenta en su seno con amplia representación de obreros, campesinos sin tierra, maestros, intelectuales, sacerdotes, profesionales y técnicos, militares en si-

tuación de retiro, pequeños empresarios agrícolas e industriales, empleados públicos y privados, marginados y precaristas, composición social que no puede ser ignorada, no sólo por su poder popular intrínseco, sino por las perspectivas que ofrece para solucionar, de manera definitiva, la grave crisis que vive la nación.

Para quienes creíamos que de la insurrección cívico militar, podía pasarse a la "revolución necesaria" (López Vallecillos: ECA 372/373 de octubre/noviembre 1979, págs. 883 y siguientes), el comportamiento irracional de algunos mandos castrenses y de grupos civiles polarizados de la situación, nos vuelve escépticos respecto a soluciones pacíficas y de recomposición de la unidad nacional por medio de un nuevo pacto social. Los acontecimientos indican que la confrontación, la insurrección popular, no sólo se está dando sino que es un signo inevitable, trágicamente inevitable para el pueblo salvadoreño. Una gran dosis de patriotismo y una definición total por parte del ejército y de las fuerzas opositoras, tal vez, pudiera evitar la matanza, a la búsqueda de racionalizar el proceso y negociar, ante el pueblo y con el pueblo, una salida histórica al conflicto.

Naturalmente sólo el proceso, rico en acontecimientos e intenso en nuevas experiencias, puede señalar con precisión el destino histórico de El Salvador.

San Salvador, 30 de abril de 1980

NOTAS

1. Para un estudio del proceso electoral que llevó al poder al Coronel Arturo Armando Molina, consultar: **El Salvador: Año Político 1971-1972**. Guatemala, Publicaciones de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", 1973. Un estudio comparativo de los programas de gobierno del PCN y la UNO en 1977, aparece en: Flores Pinel, Fernando: "Programas de Gobierno y Coyuntura Política Post-electoral". Revista ECA. No. 141, San Salvador, Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", marzo de 1977.
2. Detalles del operativo del fraude parecen publicados por la UNO en: **Prensa Gráfica**, San Salvador, 24 de febrero de 1977, pág. 34. El fraude electoral de 1977 recibió importante columnaje en la prensa internacional. Sobre este particular consultar: **La Prensa, Managua**, 21 de febrero de 1977, pág. 1. Consultar asimismo: "Violencia y Fraude en El Salvador, **Latín America Bureau**, julio de 1977.
3. **Plataforma Común**. San Salvador, septiembre de 1979. (mimeo).
4. López Vallecillos, Italo. **Rasgos Sociales y Tendencias Políticas en El Salvador (1969-1979)** Revista ECA No. 372/373, octubre/noviembre 1979.
5. Un estudio sobre la intervención militar de la Universidad de El Salvador, aparece en: **Revista de Ciencias Sociales** No. 7, Guatemala, Universidad "Rafael Landívar", agosto de 1972.
6. En el campo obrero, el contenido cualitativo del trabajo realizado se refleja en la potenciación de las cuotas de afiliación. En efecto, las cifras oficiales disponibles permiten advertir que, para el período 1972-1977, el número de sindicatos se mantuvo sin alteración, mientras que el número de afiliados pasó de 49.886 en 1972, a 76.528 en 1977. Ver: Cañas López, Justo Roberto y Ana Graciela Trejo Padilla: **Evolución, situación actual y perspectivas de la fuerza de trabajo en la industria salvadoreña**. Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Económicas, San Salvador, 1980, p. 248. (Tesis).
7. **Informe El Salvador 1979**, San Salvador, Comisión de Justicia y Paz de El Salvador, mayo de 1979.
8. Flores Pinel, Fernando. *op cit.* p. 181.
9. **Memorandum de los delegados del Foro Popular a la entrevista con los miembros de la Junta Militar, la tarde del 16 de octubre de 1979**, San Salvador, 16 de octubre de 1979, (fot).
10. **Boletín de Prensa**. Foro Popular, San Salvador, 19 de octubre de 1979. (mimeo).
11. Ver: Documentación. Revista ECA No. 375/376, Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", San Salvador, febrero de 1980.
12. **La Prensa Gráfica**, San Salvador, 2 de diciembre de 1979, pág. 2.
13. **La Prensa Gráfica**, San Salvador, 15 de diciembre de 1979, pág. 7.
14. **Evolución, crisis y orientación de las estrategias de modernización**. Documento de Trabajo, Departamento de Economía, Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", San Salvador, 1978, pág. 3.
15. *Ibid.* p. 4.
16. *Ibid.* p. 8.
17. Para 1974 la fortuna de la familia Somoza se calculaba en: \$400 millones (**Revista del Pensamiento Centroamericano** No. 157, Managua 1977, pág. 44) en los últimos años Somoza se apropiaba de aproximadamente un cuarto del producto bruto; llegando su fortuna a más de 800 millones de dólares sólo en Nicaragua. Ver: Suárez, Hernán: "Nicaragua: fin de la explotación, primer paso del desarrollo". **Ch. América** No. 60-61, Roma, Enero-febrero de 1980, pág. 104.
18. **La Crónica**, San Salvador, 22 de abril de 1979, pág. 2.
19. **Remarks by Ambassador Robert E White at meeting of American Society of El Salvador**, (San Salvador 19 de abril de 1980) mimeo, pags. 2 y siguientes.